

**GUÍA ORIENTATIVA PARA CONTRATOS ESTRUCTURADOS BAJO EL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (CFR. LEY N° 27.328 Y SU D.R. N° 118/17)**

**Introducción.**

La presente guía pretende brindar los lineamientos básicos a las potenciales autoridades convocantes de proyectos de Participación Público Privada (en adelante, los “PPP”), en los términos de la Ley N° 27.328 de “Contratos de Participación Público Privada” (en adelante, la “Ley”) y su Decreto Reglamentario N° 118/17, para el diseño de contratos bajo tal régimen, con el objeto, asimismo, de impulsar la concurrencia de los interesados y la competencia de oferentes. En tal sentido, mediante la presente se precisarán los sujetos que pueden participar en carácter de contratante y contratista, las actividades que pueden ser objeto de los contratos, las recomendaciones respecto al diseño de los mismos, las cláusulas permitidas, el contenido mínimo que deben tener los contratos, entre otras cuestiones

Cada vez más, los gobiernos de todo el mundo están estructurando proyectos de PPP como medio para suministrar y mantener su infraestructura. Ello, se debe a una serie de factores, a saber:

- La necesidad de que el sector público reduzca los costos de construcción y mantenimiento de los activos de infraestructura sin afectar negativamente la calidad de los servicios públicos;
- La necesidad de acelerar la entrega de infraestructuras tanto *greenfield* como la rehabilitación de las ya existentes, así como la expansión de la infraestructura *brownfield*; y
- La disponibilidad para los organismos gubernamentales y del sector público de un tratamiento contable ventajoso para los proyectos de PPP.

Si bien no existe una única definición de PPP aceptada internacionalmente, los elementos esenciales de un contrato de PPP son los siguientes:

- Un contrato a largo plazo entre una parte privada (el contratista) y una entidad gubernamental (el ente contratante);
- El suministro de un bien o servicio público nuevo o existente;
- Asunción por parte del contratista de una responsabilidad significativa de gestión y riesgo.

Las funciones de un proyecto de PPP transferidas al contratista –como el diseño, la construcción, el financiamiento, la operación y el mantenimiento– pueden variar de un contrato de PPP a otro, pero la inclusión de financiamiento privado es un elemento clave para asegurar que el contratista esté expuesto financieramente y por lo tanto incentivado a cumplir.

**1. Normativa aplicable a los contratos de PPP.**

Los contratos de PPP se rigen por la Ley, su Decreto Reglamentario N° 118/2017, los respectivos pliegos de bases y condiciones y por lo pactado entre las partes. Supletoriamente, en lo atinente a la responsabilidad patrimonial de las partes contratantes, se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado mediante Ley N° 26.994.

Los contratos de PPP constituyen una modalidad alternativa a los contratos regulados por las citadas Leyes N° 13.064 y N° 17.520 y sus modificatorias, y por el Decreto N° 1023/2001 y sus modificatorias y su reglamentación. Es por ello que las contrataciones bajo el régimen de PPP no les son de aplicación directa,

supletoria ni analógica, la citada normativa, como así tampoco el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos 7 y 10 de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias.

## **2. Consideraciones generales.**

Conforme a lo anterior, el régimen de contratación de PPP es un régimen particular y alternativo respecto del régimen de contratación pública general, por lo que es necesario, previo al llamado a licitación o concurso público para la adjudicación del contrato de PPP, determinar que ésta modalidad de contratación permite cumplir con los objetivos de interés público fijados por la mencionada normativa. La adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la más conveniente para el interés público, previo dictamen de la autoridad convocante, conforme a lo previsto en los artículos 13 y 15 de la Ley y su Decreto Reglamentario N° 118/2017.

Por otra parte, para el exitoso desarrollo y concreción del proyecto PPP, resulta esencial que el contrato correspondiente se adapte a las particularidades del proyecto y a sus exigencias específicas.

Para ello, el ente contratante tiene expresamente la facultad de incluir cualquier tipo de cláusulas en tanto éstas sean compatibles con el régimen de la Ley y la naturaleza del proyecto específico en cuestión.

A los efectos de estructurar el financiamiento del proyecto en particular, las bases de la contratación pueden contemplar la constitución de una sociedad de propósito específico, fideicomisos u otros tipos de vehículos o esquemas asociativos con la responsabilidad de suscribir y ejecutar el contrato de PPP. En lo relativo a la sociedad de propósito específico, deberá constituirse como sociedad anónima en los términos de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Mientras que en el supuesto de creación de fideicomisos, los mismos deberán constituirse como fideicomisos financieros en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.

Otra consideración esencial es el seguimiento de los lineamientos y las mejores prácticas internacionales existentes en la materia, procurándose garantizar el éxito de los proyectos PPP.

Sin perjuicio de ello, debe considerarse que si los contratos de PPP involucran la prestación de servicios públicos sujetos a marcos regulatorios específicos (v.gr. Ley N° 24.046 de gas natural, Ley N° 24.065 de energía eléctrica), los mismos son aplicables a la prestación de tales servicios.

## **3. Partes del contrato de PPP.**

### ***4.1. ¿Quién puede ser autoridad convocante y/o contratante?***

Conforme a los términos de la Ley, podrán convocar para presentar proyectos de PPP los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8 de la ley N° 24.156, es decir, la administración nacional, conformada por la administración centralizada y descentralizada, las empresas y sociedades del estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, entes públicos controlados por el Estado nacional y los fondos fiduciarios del Estado nacional.

### ***4.2. ¿Quiénes pueden ser oferentes y/o contratistas?***

Pueden ser oferentes y/o contratistas los sujetos privados o públicos, incluidos dentro de éstos últimos, los entes u organismos en los que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante “CABA”) o los municipios tengan participación. En tal supuesto, y durante el proceso de selección, éstos deberán actuar en un marco de competencia e igualdad de condiciones con el sector privado, sin que pueda establecerse o invocarse en su beneficio preferencia alguna. Ello siempre y cuando

no se encuentren comprendidos dentro de alguna de las incompatibilidades para contratar previstas en el artículo 23 de la Ley, conforme se detalla a continuación.

#### ***4.3 ¿Quiénes no pueden ser oferentes y/o contratistas?***

No podrán asumir la condición de oferentes o contratistas, directa o indirectamente, quienes:

- a) Carezcan de capacidad o de legitimación para contratar con el Estado, en general, o con el contratante, en particular;
- b) Hayan actuado como asesores contratados por el contratista en la implementación del proyecto en el que pretenden participar como potenciales oferentes;
- c) Sean funcionarios públicos dependientes del contratista, o ser una firma, empresa o entidad con la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia;
- d) Tengan un proceso concursal en trámite o quiebra;
- e) Hayan sido considerados, mediante resolución y dentro de los tres años calendario anteriores desde la fecha de la última publicación del llamado, incumplidores de sus obligaciones contractuales asumidas con el Estado nacional, en general, o el contratista, en particular;
- f) Hayan sido sancionados por resolución firme, dentro de los dos años anteriores al llamado público, por violación a normas ambientales;
- g) Adeuden créditos impositivos y/o previsionales a la Administración Federal de Ingresos Públicos, determinados mediante acto administrativo o sentencia judicial firmes; y
- h) Estén procesados por resolución firme o condenados por alguno de los delitos previstos en los títulos XI, XII y XIII del Código Penal de la Nación.

Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera de los supuestos previstos anteriormente, tampoco podrán formar parte de empresas o entidades oferentes o sus subcontratistas, directamente o por intermedio de otra entidad controlada, vinculada o que forme parte de un conjunto económico con ella.

#### **5. Objeto del contrato de PPP.**

El objeto del régimen de los contratos de PPP es el desarrollo de proyectos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

En consecuencia, los contratos podrán versar sobre el diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento del referido objeto.

De conformidad con el citado Decreto Reglamentario, están expresamente excluidos de los posibles proyectos de PPP los contratos cuyo único objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro Nacional.

#### **6. Contenido del contrato de PPP.**

Cada contrato de PPP deberá ajustarse al proyecto en particular, pero, independientemente de lo que se prevea en los respectivos pliegos y en la documentación contractual adicional, cada contrato deberá contener las siguientes previsiones:

**6.1. Previsiones relativas al contrato en sí mismo.**

- La identificación del objetivo de interés público que será satisfecho con el proyecto de PPP;
- El plazo de vigencia del contrato (cuyo máximo es de treinta y cinco -35- años) y la posibilidad de su prórroga;
- Las obligaciones y derechos del contratante y el contratista de conformidad con las características del proyecto;
- El equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos relativos al contrato y las condiciones para prevenirlos, asumirlos o mitigarlos, a fin de minimizar el costo del proyecto;
- Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas y las sanciones por incumplimiento contractual, los procedimientos de aplicación, las formas de ejecución y el destino de las sanciones de índole pecuniaria;
- La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración, según los casos, de los usuarios, del contratante o de terceros;
- Los procedimientos de revisión del precio del contrato para preservar la ecuación económico-financiera;
- En su caso, los aportes que el contratante se comprometa a efectuar durante la vigencia del contrato;
- La facultad del contratante de establecer variaciones al contrato de manera unilateral en lo que refiere a la ejecución del proyecto, con un límite del 20% en más o menos del valor total del contrato, compensando adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio económico-financiero original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;
- Las garantías de ingresos mínimos, de corresponder;
- La obligación del contratista de cumplir con toda la legislación laboral, de higiene y seguridad en el trabajo y de seguridad social que resulte aplicable;
- Las garantías de cumplimiento del contrato a favor del contratante;
- Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes, razones de interés público u otras causales con indicación del procedimiento a seguir;
- La facultad de subcontratación, previa comunicación al contratante y con su aprobación y consentimiento;
- Las causales de extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago;

- La facultad de las partes de suspender temporariamente la ejecución de sus prestaciones por incumplimiento de las obligaciones de la otra parte, delimitándose los supuestos para su procedencia;
- La especificación de los bienes muebles e inmuebles que se revertirán o serán transferidos al Estado nacional al extinguirse el contrato;
- Los mecanismos para restablecer, en un plazo determinado, la ecuación económico-financiera del contrato si esta se viera alterada significativamente por razones imprevisibles al momento de adjudicar y sean ajenas a la parte que invoca el desequilibrio; y
- Los gastos que insuma el funcionamiento del Panel Técnico.

#### **6.2. Previsiones relativas al proyecto en sí mismo.**

- Mecanismos de supervisión y control de la ejecución de la obra y sus etapas;
- Los requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a desarrollar;
- Los estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones;
- Los mecanismos y procedimientos de medición, evaluación y control del cumplimiento de las obligaciones;
- Los instrumentos que permitan adaptar las modalidades de ejecución del contrato a los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de financiamiento que se produzcan a lo largo de su vigencia;
- La facultad del contratante de constituir garantías, a fin de garantizar el repago del financiamiento necesario para llevar a cabo los proyectos, en los términos del capítulo III de la ley N° 27.328;
- La facultad del contratante de prestar su cooperación para la obtención del financiamiento que sea necesario para la ejecución del proyecto;
- La titularidad y el régimen de explotación, afectación y destino de los bienes, muebles e inmuebles que se utilicen o se construyan durante la vigencia del contrato, una vez resuelto éste;
- La posibilidad de ceder o de dar en garantía los derechos de crédito emergentes del contrato;
- Los requisitos y condiciones a fin de que el contratante autorice la transferencia del control accionario de la sociedad de propósito específico y del control de los certificados de participación en el caso de fideicomisos, en caso en que la sociedad o fiduciario de propósito específico incumpla las condiciones de los acuerdos de financiamiento; todo ello a fin de asegurar la continuidad del contrato; y
- La facultad para ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero y las condiciones para que la cesión proceda, es decir, cuando este tercero reúna requisitos similares que el cedente y que haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida.

#### **6.3. Previsiones relativas a la resolución de disputas.**

- Los procedimientos y métodos aplicables para dirimir las controversias de índole técnica, interpretativa o patrimonial que se susciten durante la ejecución y terminación del contrato; y

- Los procedimientos y métodos aplicables para dirimir las demás controversias, pudiendo recurrirse al arbitraje.

## **7. Variaciones al Contrato de PPP.**

El ente contratante ostenta la facultad de establecer en forma unilateral variaciones al contrato, cumpliendo con una serie de requisitos, a saber:

- Que dichas variaciones correspondan sólo a la ejecución del proyecto;
- Hasta un límite máximo, en mas o en menos, del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato;
- Siempre y cuando realice las compensaciones adecuadas en razón de la alteración;
- Preserve el equilibrio económico-financiero original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento.

El citado Decreto Reglamentario añade que dicha compensación al contratista deberá efectuarse mediante la modificación de algún factor del régimen económico del contrato de PPP. A tal fin, el cálculo de las compensaciones y el ajuste de los factores mencionados anteriormente, deberán siempre efectuarse de manera tal de obtener que el valor presente neto de las variaciones sea igual a cero (0), todo ello considerando la tasa de descuento aplicable, según lo dispuesto en el respectivo pliego y/o en el contrato de PPP y el efecto económico que dichas variaciones puedan tener en el proyecto.

## **8. Informes de los organismos públicos intervinientes.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del citado Decreto Reglamentario, con carácter previo a la emisión por parte de la autoridad convocante del dictamen contemplado en el artículo 13 de la Ley y a la aprobación de la documentación contractual, deberán intervenir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (el “Ministerio de Ambiente”), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas, a efectos de expedirse en relación a los proyectos de PPP, mediante la emisión de los informes indicados a continuación:

### ***8.1. Informe ambiental.***

El artículo 5 del Decreto Reglamentario establece que el Ministerio de Ambiente deberá formular las consideraciones que estime pertinentes en relación al proyecto de PPP.

Adicionalmente, el Decreto Reglamentario dispone que, previo al llamado a licitación y/o concurso públicos, se deberá contar con todas aquellas autorizaciones ambientales que resulten necesarias correspondientes a la etapa del desarrollo del proyecto de PPP.

Asimismo, el referido artículo 5 establece que en la documentación contractual (a saber, pliegos y contrato) deberán especificarse las obligaciones y responsabilidades de índole ambiental que recaerán sobre cada una de las partes del respectivo contrato a los efectos del cuidado y conservación del medio ambiente.

Por último, el Decreto Reglamentación ordena al ente contratante a actuar con la mayor diligencia ante las autoridades locales para facilitar el cumplimiento de las exigencias ambientales que éstas requieran en el marco de sus competencias, para lo cual requerirá la asistencia y colaboración que pueda corresponder al Ministerio de Ambiente.

## **8.2. Informes presupuestarios y financieros.**

Por su parte, el artículo 6 de la Ley ordena que las erogaciones y compromisos que se asuman en los respectivos proyectos de PPP “deberán ser consistentes con la programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad fiscal y de debida rendición de cuentas.” Este artículo también ordena al Poder Ejecutivo a informar al Congreso de la Nación el impacto fiscal de los compromisos asumidos, debiéndose incluir dichos impactos fiscales en las respectivas leyes de presupuesto.

De acuerdo a lo establecido en el párrafo precedente, el Decreto Reglamentario establece que la Unidad de PPP (la “UPPP”) solicitará al Ministerio de Hacienda que comunique el impacto fiscal de los compromisos asumidos, el cual será informado por la UPPP a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público Privada del Congreso de la Nación (creada por la Ley) en ocasión de la presentación anual requerida por el artículo 30 de la Ley.

Asimismo, el Decreto Reglamentario ordena al Ministerio de Hacienda, previa intervención de la UPPP, el dictado de una reglamentación a la cual deberán ceñirse los órganos y entes del sector público nacional para definir e informar las erogaciones y compromisos que se asuman en el marco de los proyectos de PPP.

En cuanto a los informes que deberán ser emitidos por los ministerios públicos, el artículo 6 del Decreto Reglamentario ordena al Ministerio de Hacienda expedirse con respecto a: (i) la razonabilidad de la utilización de los recursos públicos y (ii) los términos y condiciones del contrato PPP en sus aspectos económicos y financieros en lo atinente a la asunción de riesgos y obligaciones por parte del sector público nacional; mientras que el Ministerio de Finanzas deberá expedirse con respecto a los términos y condiciones en lo atinente a la asunción de riesgos y obligaciones relacionados con la estructura financiera propuesta, incluyendo su costo financiero, y en la medida en que involucre endeudamiento público.

## **9. Procedimiento de selección de los contratistas. Pliego de bases y condiciones.**

La selección del contratista podrá ser efectuada mediante dos modalidades: el procedimiento de licitación o concurso público nacional o internacional, según una serie de factores, como ser la complejidad técnica del proyecto, razones económicas y/o financieras vinculadas al proyecto, entre otros. Dichos procedimientos resultarán de aplicación cualquiera fuera el valor del proyecto y estarán dirigidos a una cantidad indeterminada de posibles contratistas. Cuando el criterio de selección del contratista recaiga primordialmente en factores económicos, se efectuará la licitación pública; mientras que cuando su criterio de selección recaiga en otros factores distintos a los económicos, se efectuará el concurso público. Asimismo, los procedimientos de licitación y concursos públicos pueden ser de etapa única o múltiple y/o nacionales o internacionales.

Mediante dichos procedimientos, deberá garantizarse la transparencia, publicidad, difusión, igualdad, concurrencia y competencia.

El Decreto Reglamentario N° 118/2017 prohíbe expresamente la adjudicación directa, disponiendo en su artículo 12, inciso 3, que cualquiera sea el objeto del contrato de PPP, la adjudicación directa no será procedente en ningún caso, inclusive en los supuestos en los que el potencial contratista sea un órgano o ente del sector público nacional (con el alcance previsto en el artículo 8 de la Ley N° 24.156), o un ente u organismo provincial o municipal o del gobierno de la CABA, o bien una empresa o sociedad en la que tenga participación mayoritaria el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o se trate de Universidades Nacionales.

La adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la más conveniente para el interés público.

Los pliegos licitatorios, elaborados y aprobados por la autoridad convocante, previa intervención de la UPPP, deberán promover en sus pautas de selección criterios que determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas consideradas micro, pequeñas y

medianas, salvo que la UPPP, mediante informe fundado, justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión en las condiciones y necesidades particulares del proyecto.

Es dable destacar que las especificaciones técnicas de los respectivos pliegos de bases y condiciones serán elaborados de manera tal de permitir el acceso a los procedimientos de selección en condiciones de igualdad de los oferentes y evitar, de esta manera, la creación de obstáculos injustificados a la participación de interesados y a la competencia entre los oferentes.

### ***9.1. Publicidad y difusión de la Licitación.***

Tanto la Ley como su Decreto Reglamentario, establecen las pautas a seguir para la publicidad y difusión de la licitación.

La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones deberá efectuarse una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días desde que la UPPP hubiese publicado en su sitio web la totalidad de los estudios e informes relativos al proyecto de PPP en cuestión, incluyendo el dictamen de la autoridad convocante en los términos del artículo 13 de la Ley. La publicidad de la convocatoria deberá publicarse mediante avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina, por el término de tres (3) días. La última publicación deberá tener lugar, como mínimo, con sesenta (60) días corridos de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar las respectivas ofertas o para el retiro del pliego, lo que ocurra primero.

Además, en todos los casos, la convocatoria de la licitación deberá difundirse en el sitio web de la UPPP y el en sitio web de la autoridad convocante. Adicionalmente, en los supuestos en que la licitación sea internacional, la convocatoria a presentar ofertas deberá también efectuarse mediante la publicación de un (1) aviso en el sitio web oficial de las Naciones Unidas o en el sitio web oficial del Banco Mundial, indistintamente, por el término de tres (3) días, computándose también en estos casos el plazo de sesenta (60) días de anticipación, previsto en los casos de licitación nacional.

De modo adicional, y según la naturaleza del proyecto de PPP respectivo, la autoridad convocante podrá disponer la publicación de la convocatoria en medios de circulación masiva en el país o en el extranjero.

En lo concerniente a la difusión, la autoridad convocante deberá difundir en su sitio web oficial, como también en el sitio web de la UPPP, la siguiente información:

- Dictamen de la autoridad convocante (cfr. con el artículo 13 de la Ley);
- La convocatoria a licitación, junto con los respectivos pliegos;
- Las circulares aclaratorias o modificatorias de dichos pliegos;
- Las actas de apertura de las ofertas;
- Los cuadros comparativos de las ofertas;
- La preselección en la licitación, en los supuestos de etapa múltiple;
- El dictamen de evaluación de las ofertas, expedido por la Comisión Evaluadora; y
- La adjudicación, la decisión de declarar desierta o fracasada la licitación o la de dejarla sin efecto.

### ***9.2. Vista de los pliegos. Circulares aclaratorias y modificatorias del pliego.***

De conformidad con el Decreto Reglamentario de la Ley, las consultas al pliego, por parte de los interesados, deberán efectuarse por escrito en la sede de la autoridad convocante, o en el lugar que se indique en el citado pliego, o en la dirección institucional de correo electrónico de la autoridad convocante, difundida en el pertinente llamado.

A tal efecto, los interesados consultantes deberán suministrar obligatoriamente sus datos identificatorios, a saber, su nombre o razón social, domicilio o sede social, domicilio electrónico y dirección de correo electrónico, en los que serán válidas las comunicaciones que se cursen hasta el día de apertura de las ofertas.



Dichas consultas deberán ser efectuadas, como mínimo, hasta siete (7) días antes de la fecha fijada para la apertura, salvo disposición contraria en el pliego.

Por otra parte, ya sea de oficio o como respuesta a dichas consultas, la autoridad convocante podrá emitir circulares aclaratorias o modificatorias del pliego.

Las *circulares aclaratorias* deberán ser comunicadas con cuatro (4) días como mínimo de anticipación a la fecha establecida para presentar ofertas a todas las personas que hubiesen retirado o descargado el pliego en el sitio web respectivo, y al que hubiera efectuado la consulta si la circular se hubiese emitido como consecuencia de ello. Dichas circulares se incluirán como parte integrante del pliego y se difundirán en el sitio web oficial de la UPPP y en el de la autoridad convocante.

En lo que respecta a las *circulares modificatorias*, las mismas deberán ser difundidas por tres (3) días en los mismos medios en que hubiera sido publicado el llamado original de la licitación, debiendo la última publicación tener lugar con un (1) día como mínimo de anticipación a la fecha original establecida para presentar ofertas. Al igual que las circulares anteriores, se incluirán como parte integrante del pliego y serán difundidas en los sitios web de la UPPP y de la autoridad convocante.

A diferencia de las circulares aclaratorias, las *modificatorias* interrumpen el citado plazo de treinta (30) días), es decir, que entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, deberán cumplirse los mismos plazos de anticipación que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de apertura, por lo que deberá indicarse en la misma la nueva fecha para la presentación de las ofertas.

Como consecuencia de ello, el citado Decreto Reglamentario establece que las circulares por las cuales únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas, deberán ser difundidas por un (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido el llamado a convocatoria original, debiendo la última publicación tener lugar con un (1) día, como mínimo, de anticipación a la fecha original fijada para la presentación de las ofertas. Dichas circulares modificatorias deberán ser comunicadas a todas las personas que hubiesen tomado vista del pliego y al que hubiese efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de anticipación. Formarán parte del pliego y serán difundidas también en los sitios web de la UPPP y de la autoridad convocante.

### **9.3. Vista e impugnación de las ofertas.**

Una vez presentadas las ofertas por parte de los interesados y celebrada la apertura de las ofertas (y suscripta la correspondiente acta de apertura), el citado Decreto Reglamentario establece distintos plazos para tomar vista de las ofertas presentadas, como también para impugnarlas.

Las ofertas serán exhibidas a los oferentes por el plazo mínimo de cinco (5) días, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de la apertura, pudiendo los oferentes a tal efecto solicitar copia a su costa. Dichas ofertas podrán ser impugnadas dentro del plazo de cinco (5) días, computados a partir del vencimiento del plazo de vista de las ofertas.

La autoridad convocante será la encargada de dar traslado, por un plazo de cinco (5) días de la impugnación, al oferente cuya oferta fuera impugnada.

### **9.4. Etapa de evaluación de las ofertas. Comisiones Evaluadoras.**

Una vez agotada la etapa de impugnación de las ofertas, las actuaciones serán remitidas a la Comisión Evaluadora, a los efectos de que analice toda la documentación enviada y emita un dictamen final, el cual no tendrá carácter vinculante al momento de la adjudicación. Dicha etapa de evaluación, como también los requisitos a ser cumplidos en cuanto a la integración, composición y funciones de las comisiones evaluadoras, se encuentran previstos detalladamente en el citado Decreto Reglamentario.

Las Comisiones Evaluadoras deberán estar integradas por un mínimo de tres (3) miembros y sus respectivos suplentes. Sus integrantes deberán ser designados mediante acto administrativo emanado de la autoridad convocante, con la única limitación de que tal designación no deberá recaer en quienes tuvieran competencia para autorizar la convocatoria o para adjudicar la licitación.

Para sesionar y emitir dictámenes válidos, las Comisiones Evaluadoras deberán sujetarse a diversas reglas, a saber:

- El quórum para el funcionamiento se dará con la totalidad de sus miembros titulares. En caso de ausencia o impedimento de los miembros titulares (debidamente justificados), el quórum se cumplirá con los miembros suplentes;
- Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta, calculada sobre el total de sus miembros.

Cuando se tratare de proyectos de PPP para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos específicos o bien para garantizar la correcta apreciación de los criterios de sustentabilidad, las Comisiones Evaluadoras podrán requerir la intervención de peritos técnicos o solicitar informes a instituciones estatales o privadas que cuenten con tales conocimientos. Los dictámenes de las Comisiones Evaluadoras versarán sobre el cumplimiento de los requisitos del pliego, la admisibilidad de las ofertas y su evaluación de conformidad con los parámetros establecidos en el pliego y podrán contener recomendaciones que, en su caso, estime convenientes formular.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante la misma no se concederá vista de las actuaciones.

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá ser emitido dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones. Dicho plazo sólo podrá ser excedido por causas excepcionales, debidamente fundadas por las Comisiones Evaluadoras en su dictamen.

Dicho dictamen se notificará a todos los oferentes, dentro de los dos (2) días de emitido. Asimismo, se publicará en los sitios web de la UPPP y de la autoridad convocante. El Decreto Reglamentario N° 118/2017 prevé un mecanismo de impugnación al dictamen de evaluación. En tal caso, los oferentes tendrán un plazo de 5 (cinco) días desde su notificación, sin que resulte exigible la previa integración de una garantía de impugnación.

#### **9.5. Adjudicación de la oferta más conveniente.**

Previo al acto de adjudicación, la autoridad convocante solicitará la intervención de la UPPP para que dictamine acerca del procedimiento de selección desarrollado. Dicho dictamen no será impugnabile.

Como se ha explicado al principio de esta sección, la adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la más conveniente para el interés público, de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases de la licitación. El acto de adjudicación será dictado por la autoridad convocante y será notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado. En el supuesto de que se hubieran formulado impugnaciones a las ofertas o contra el dictamen expedido por la Comisión Evaluadora, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

#### **9.6. Garantías.**

El artículo 31 del referido Decreto 1023/01 establece que *“para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán constituir garantías o contra-garantías por anticipos otorgados por la Administración Nacional, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que aquélla determine”*.

Tal como es dable advertir, en el régimen general de contratación pública, las garantías son establecidas antes de la adjudicación para evitar el retiro intempestivo de las ofertas, y luego de celebrado el contrato, como salvaguarda de los eventuales incumplimientos en que incurra la contratista.

Es decir, que la garantía está prevista para asegurarle al contratante que, ante un evento que altere el normal desarrollo del procedimiento de selección o del cumplimiento del contrato, pueda exigirse su ejecución.

De acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta, la cual será establecida en el respectivo pliego. Mientras que el contratista adjudicatario, además de la garantía prevista anteriormente, deberá prestar la de cumplimiento del contrato de PPP.

De acuerdo a lo previsto por el citado Decreto Reglamentario, la garantía de cumplimiento del contrato de PPP podrá constituir, entre otras:

- Garantía de construcción: Deberá ser constituida en relación a la correspondiente fase de construcción, en la forma y monto establecidos en el respectivo pliego. La Reglamentación agrega que cuando las características del contrato de PPP lo justifiquen, la autoridad convocante podrá fijar otras modalidades de garantías y/o establecer montos de garantía variables en el tiempo, en función del grado de avance o cumplimiento de la ejecución del proyecto en particular.
- Garantía de explotación: Deberá ser constituida en la forma y monto establecidos en el respectivo pliego, antes de la explotación del proyecto, en su totalidad o sólo respecto de una parte del mismo y en tanto sea susceptible de explotación independiente. Dicha garantía podrá incrementarse al final del período de explotación para garantizar el cumplimiento efectivo de las condiciones de extinción contractual, fijadas en el pliego o contrato de PPP respectivos.

Tales garantías, como las que se puedan constituir en el marco de la Ley y su Decreto Reglamentario, deberán mantenerse durante los plazos que se indiquen a tal efecto en el pliego o en el contrato de PPP, de corresponder. Caso contrario, el citado Decreto Reglamentario prevé que las mismas podrán ser ejecutadas por la autoridad convocante o por el ente contratante, según corresponda, antes de su vencimiento y previa intimación. Asimismo, se establece que cuando tales garantías no sean suficientes para cubrir los posibles riesgos y responsabilidades a las que fueron afectadas, la autoridad convocante o, en su caso, el ente contratante, podrá proceder al cobro de la diferencia ante el tribunal competente.

Por su parte, el referido Decreto Reglamentario prevé lo atinente a la naturaleza de las garantías prestadas y fija pautas para su devolución.

En el respectivo pliego se determinarán la naturaleza, forma, cuantía y moneda de las garantías, las cuales podrán constituirse mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianzas, avales bancarios o seguros de caución otorgados por empresas o entidades de primera línea y de reconocida solvencia.

Asimismo, se establecen las pautas de devolución de las garantías objeto de estudio mediante dos mecanismos: la devolución de las garantías de oficio, o a solicitud de los interesados, teniendo en cuenta la clase de garantía respectiva.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas de oficio a aquellos oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los diez (10) días hábiles de presentada la garantía de cumplimiento del contrato por el oferente adjudicatario. En relación al adjudicatario, dicha garantía será devuelta de oficio una vez suscripto el respectivo contrato de PPP e integrada la de cumplimiento del contrato. Mientras que la garantía de cumplimiento de contrato será devuelta: (i) de oficio, una vez cumplido el respectivo contrato de PPP a plena satisfacción del ente contratante, y de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato; (ii) a solicitud del adjudicatario, cuando sea autorizado en el pliego respectivo y cuando por las características del contrato de PPP sea factible, se procederá a la devolución parcial de las garantías en

proporción a la parte ya cumplida del contrato de PPP, para lo cual se prevé la sustitución de la garantía para cubrir los saldos resultantes.

Sin perjuicio de lo anterior, la garantía de cumplimiento de contrato no será devuelta hasta que esté vencido el plazo de la misma y cumplido satisfactoriamente el contrato de PPP, o hasta que se declare su extinción sin culpa del contratista. Asimismo, el citado Decreto Reglamentario prevé que en los casos de cesión del respectivo contrato de PPP, no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el contratista (cedente) hasta tanto se hubiese constituido en debida forma la que oportunamente deberá constituir el cesionario.

## **10. Resolución de Disputas.**

### **10.1. *Paneles Técnicos.***

La Ley, en su artículo 9 inciso w), contempla la utilización de los denominados paneles técnicos (en adelante, el “Panel Técnico”), a los efectos de dirimir las controversias de índole técnica, interpretativa o patrimonial que puedan suscitarse en virtud de la ejecución y terminación del contrato de PPP.

Dicho panel deberá estar integrado por profesionales y/o representantes de universidades nacionales o internacionales, con acreditada experiencia en ingeniería, ciencias económicas y ciencias jurídicas, con acreditación de independencia, imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional e internacional en la materia en cuestión y, salvo previsión en contrario en el pliego en cuestión o en el contrato de PPP, estará integrado por cinco (5) miembros.

De conformidad con el citado Decreto Reglamentario, los integrantes del Panel Técnico serán seleccionados por las partes, entre aquellos que se encuentren incluidos en el listado de profesionales habilitados llevado por la UPPP. Dicha lista se confeccionará previo concurso público de antecedentes, el que deberá ser convocado por la UPPP. Los profesionales seleccionados integrarán dicha lista por un plazo de cuatro (4) años. En caso de no existir acuerdo de partes, la designación la efectuará la UPPP mediante sorteo público.

Tanto en el respectivo pliego como o en el contrato de PPP, se podrá prever la aplicación de reglamentos sobre el funcionamiento del Panel Técnico. Asimismo, podrá preverse la aplicación de reglamentos sobre el funcionamiento de los paneles elaborados por organizaciones o entidades internacionales especializadas en la materia, para regir todos aquellos aspectos no previstos en el Decreto Reglamentario.

Salvo previsión en contrario en el pliego o en el contrato de PPP, podrán someterse a la resolución del Panel Técnico todas las controversias referidas anteriormente, incluyendo la revisión de las sanciones y otros actos o medida que dicte el ente contratante, sin necesidad de presentar en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas de ningún tipo. Cuando se previere la existencia de un Panel Técnico, las partes no podrán someter estas controversias al tribunal judicial o arbitral competente sin que antes hayan sido sometidas al panel, con la excepción de la extinción del contrato de PPP por razones de interés público y la solicitud de medidas cautelares.

El Panel Técnico se encuentra habilitado a convocar audiencias, disponer la producción de medios de prueba e intentar que las partes concilien sus respectivas pretensiones y pongan término a la controversia de común acuerdo. A tales efectos, las partes deberán cooperar con el Panel Técnico.

El Panel Técnico deberá expedirse sobre las controversias que le sean sometidas, dentro del plazo fijado, mediante recomendaciones que sólo serán obligatorias para las partes en caso de que ninguna de ellas haya planteado su disconformidad dentro del plazo previsto. No podrá solicitarse al tribunal judicial o arbitral competente la revisión de las recomendaciones que hayan adquirido carácter definitivo.

Si el Panel Técnico no se expidiese en el plazo previsto o si alguna de las partes manifestase su

disconformidad con la recomendación del Panel Técnico, las partes podrán someter la controversia: (i) al tribunal judicial competente, o (ii) en caso de haberse previsto arbitraje, al tribunal arbitral.

En caso de que cualquiera de las partes no cumpla con una recomendación definitiva del Panel Técnico, la otra parte podrá solicitar su cumplimiento ante el tribunal judicial o arbitral competente, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y demás consecuencias jurídicas previstas en el pliego o en el contrato de PPP. En caso de no constituirse un Panel Técnico ni haberse pactado arbitraje, resultarán aplicables las vías de impugnación previstas en la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos. En el caso de que sí se hubiese pactado arbitraje, cualquier controversia podrá ser sometida directamente al tribunal arbitral, siendo opcionales para el contratista las vías de impugnación previstas en dicha Ley de Procedimientos Administrativos.

A los efectos de que el ente contratante pueda poner término, por cualquier modo de extinción de las obligaciones, a una controversia que sea sometida a un Panel Técnico o, en su caso, pueda consentir una recomendación, deberá contar con la previa autorización del Ministro competente o de la autoridad superior, según corresponda.

### **10.2. Arbitraje.**

La Ley contempla expresamente la posibilidad de pactar una cláusula arbitral. En particular, el artículo 25 de la Ley prevé que todas las controversias que pudiesen surgir con motivo de la ejecución, aplicación y/o interpretación de los contratos de PPP, los pliegos de bases y condiciones y la documentación contractual correspondiente podrán sujetarse a mecanismos de avenimiento y/o arbitraje.

De conformidad con el citado Decreto Reglamentario, en los pliegos o en el contrato de PPP podrá encomendarse la administración del arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades nacionales o extranjeras de reconocida trayectoria en la materia, en cuyo caso los reglamentos de arbitraje de las entidades administradoras regirán el proceso arbitral e integrarán el contrato de arbitraje.

Asimismo, la Ley permite la posibilidad de acordar arbitraje con prórroga de jurisdicción, para lo cual se requiere que la correspondiente cláusula arbitral o contrato de arbitraje, según corresponda, sea aprobado - en forma expresa e indelegable - por el Poder Ejecutivo. En caso de aprobarse dicha prórroga, conforme la Reglamentación, el Jefe de Gabinete de Ministros deberá comunicar su aprobación al Congreso de la Nación.

Complementariamente, el artículo 25 de la Reglamentación establece las siguientes pautas en materia arbitral:

- El tribunal arbitral estará integrado por uno o tres árbitros de derecho. En el supuesto en que esté integrado por un árbitro, el mismo será designado por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por la entidad administradora del arbitraje designada o por el órgano que se prevea en el pliego o en el contrato de PPP. En el caso restante, los árbitros serán designados, uno a propuesta del ente contratante, uno a propuesta del contratista y uno que será nombrado por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el órgano que se prevea en el pliego o en el contrato de PPP;
- El respectivo pliego podrá prever que el presidente del tribunal no podrá tener la nacionalidad de ninguna de las Partes o de cualquier accionista que tenga más del diez por ciento (10%) de las acciones del contratista;
- Las partes deberán reconocer: (i) que la cláusula o contrato de arbitraje es autónomo respecto del contrato de PPP con el que se relaciona; y (ii) que la cláusula o el contrato de arbitraje otorga al tribunal arbitral la atribución para decidir sobre su propia competencia.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley establece que en los contratos de PPP se podrá prever que los pagos que se devengasen a cargo de la contratante durante el trámite de la controversia, se hagan efectivos en la

medida en que no se vean alcanzados por dicha controversia. Luego el mismo artículo agrega que, en estos casos, si la administración o, en su caso, el consultor técnico designado al efecto, verificase que el contratista ha cumplido debidamente con sus obligaciones contractuales, la parte contratante deberá depositar, en una cuenta en garantía o fideicomiso, hasta su resolución final, los fondos alcanzados por la controversia. Conforme el citado Decreto Reglamentario, la UPPP determinará el procedimiento aplicable a los fines de efectuar el depósito antes mencionado

## **11. Financiamiento de los proyectos de PPP – Cesión.**

A los efectos de financiar los proyectos de PPP, el contratista podrá contratar préstamos, emitir títulos de deuda con o sin oferta pública, constituir fideicomisos financieros, que emitan títulos de deuda o certificados de participación, crear fondos comunes de inversión y/o cualquier otra estructura financiera susceptible de ser garantizada a través de la cesión de los contratos de PPP y/o de los derechos de crédito emergentes del contrato de PPP y sus correspondientes garantías.

La cesión de los derechos creditorios emergentes del contrato de PPP deberá ser notificada al contratante en los términos del artículo 1.620 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las cesiones podrán hacerse en garantía o en pago total o parcial.

En el caso de que el proyecto sea solventado total o parcialmente por el flujo de la contraprestación debida al contratista por la ejecución del proyecto, y para cumplir con el requisito de la oposición a terceros, el mismo se considerará cumplido con la publicación de la cesión por el término de 3 (tres) días en el Boletín Oficial y, en su caso, también en un diario de la jurisdicción de emplazamiento del proyecto, sin ser necesario notificarla por acto público individual a los deudores cedidos. Dicha cesión deberá ser, en todos los casos, comunicada al contratante, el cual, en su caso, preverá la notificación a los usuarios para el supuesto de modificarse el domicilio de pago al que ellos están obligados.

Tal como ha se explicado en la sección 6 de la presente, en el contrato de PPP puede preverse la facultad del contratista de ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero, siempre que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra.

La Ley establece al respecto que, previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, deberá contarse con un dictamen fundado por parte del órgano que ejerza el control de la ejecución del contrato sobre el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el anterior párrafo, como así también sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista cedente, y dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre los riesgos que asume, frente a este nuevo escenario, el Estado nacional. Dicho dictamen deberá ser informado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público Privada del Congreso de la Nación. Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión, y con intervención de la UPPP, se deberá obtener, asimismo, la aceptación lisa y llana de los financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización del ente contratante, con intervención de la UPPP.

## **12. Unidad de Participación Público Privada.**

El referido Decreto Reglamentario N° 118/2017, mediante su artículo 2, crea la UPPP en el ámbito del Ministerio de Finanzas, con las funciones establecidas en la Ley y en su Decreto Reglamentario. Asimismo, establece que el Ministerio de Hacienda asistirá a la UPPP en el marco de dicha Ley.

### ***12.1. Principales funciones de la UPPP.***

La Ley dispone que la UPPP tiene a su cargo la centralización normativa de los contratos de PPP.

El rol principal de la UPPP es prestar, a solicitud de los órganos o entes licitantes, apoyo consultivo,

operativo y técnico en las siguientes etapas:

- La formulación del proyecto;
- La elaboración de la documentación licitatoria; y/o
- La ejecución del contrato.

Sus principales funciones abarcan, entre otras:

- Asesorar y asistir al Poder Ejecutivo en la elaboración de programas y planes de desarrollo de proyectos de PPP y de disposiciones regulatorias, manuales, guías y modelos de contrato.
- Asesorar y asistir, a requerimiento de las entidades contratantes, en el diseño y estructuración de proyectos, abarcando la realización de estudios de factibilidad, preparación de documentación licitatoria, promoción nacional y/o internacional de los proyectos y en la implementación de los procedimientos de selección de los contratistas; en el diseño, organización y funcionamiento de sistemas de control de las actividades de sus contratistas; en los procesos de fortalecimiento de capacidades para la estructuración y control de los proyectos de PPP.
- Asumir funciones delegadas de estructuración y control de los proyectos de PPP desde las entidades contratantes.

Por último, cabe destacar, que la UPP es la entidad responsable en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275.

#### ***12.2. Otras facultades y funciones de la UPPP previstas en la Ley y en su Decreto Reglamentario.***

La Ley dispone que la UPPP deberá presentar anualmente ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de PPP un informe fundado sobre el estado de ejecución y cumplimiento de los contratos de PPP en curso, así como respecto de las condiciones y características de aquellos proyectos que la UPPP considerase conveniente desarrollar bajo dicha modalidad durante los próximos dos ejercicios presupuestarios.

A tal efecto, la UPPP podrá Solicitar al Ministerio de Hacienda que comunique - a partir de la información que emitan los entes contratantes - el impacto fiscal de los compromisos asumidos a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley y el artículo 6° del Decreto Reglamentario, pudiendo también solicitar dicha información a las autoridades convocantes; y centralizar la información y documentación necesaria a los efectos de que el Ministerio de Hacienda pueda proveerle la información requerida en el artículo 6 de la Ley y su Decreto Reglamentario.

Asimismo, en el marco de sus funciones, la UPPP deberá:

- En forma conjunta con el Ministerio de Modernización, identificar las alternativas electrónicas disponibles de manera que éstas puedan ser utilizadas en la implementación del régimen de la Ley e incluidas en las guías orientativas de prácticas que la UPPP emita, para su ulterior incorporación en los pliegos, de conformidad con el artículo 3 del referido Decreto Reglamentario.
- Elaborar y presentar ante el Poder Ejecutivo, una propuesta de reglamentación del procedimiento transparente de consulta previsto en el artículo 14 de la Ley, teniendo presente las pautas allí dispuestas.
- Conjuntamente con la Oficina Anticorrupción, identificar las mejores prácticas de transparencia y ética vigentes internacionalmente en materia de proyectos PPP para su incorporación en las guías que emitirá la UPPP para su posterior inclusión en los pliegos.
- Determinar, a los fines de la confección del dictamen de la autoridad convocante previsto en el artículo

13 de la Ley, los procedimientos aplicables para la emisión y tratamiento de los informes y opiniones de los órganos y entidades del sector público nacional que se requieran a tal efecto, pudiendo concertar la celebración de una audiencia de tratamiento de dichos informes y las opiniones.

### ***12.3. Intervenciones de la UPPP requeridas en la Ley y en su Decreto Reglamentario.***

Tanto en la Ley como en el referido Decreto Reglamentario, se prevé la intervención de la UPPP en distintas instancias de un proyecto PPP. En particular, se requiere su intervención en las siguientes oportunidades:

- En el marco de la emisión del dictamen de la autoridad convocante previsto en el artículo 13 de la Ley sobre la factibilidad y justificación de la contratación mediante la celebración de un contrato de PPP.
- Previo al acto de adjudicación, acerca del procedimiento de selección desarrollado, de conformidad con lo previsto en la sección 9 de la presente.
- En forma previa a que el Ministerio de Hacienda apruebe la reglamentación a la que deberán ceñirse los órganos y entes del sector público nacional para definir e informar las erogaciones y compromisos que asuman en el marco de los proyectos.
- Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión del contrato de PPP, conforme lo previsto en el artículo 9 Inciso t) de la Ley.
- En aquellos casos en los que el Poder Ejecutivo decida exceptuar el requisito del “componente nacional” en lo relativo a la provisión de bienes y servicios en el marco de los contratos de PPP o dejar de lado en los pliegos el establecimiento de ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales y micro, pequeñas y medianas empresas, previa intervención del Ministerio de Producción de la Nación, conforme lo previsto en los artículos 12 y 15 de la Ley y 12 inciso 41 del referido Decreto Reglamentario.
- En la implementación del mecanismo de consulta y dialogo previsto en el artículo 14 de la Ley.

Asimismo, podrá solicitarse su intervención en caso de que las partes invoquen la existencia de desequilibrio económico-financiero en el contrato de PPP, en cuyo caso la UPPP podrá solicitar un informe de la Procuración del Tesoro de la Nación al respecto, conforme lo previsto en el artículo 9 inciso j) de la Ley.